

LEY D Nº 2287

CAPITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º - La presente tiene por objeto el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de vida.

Artículo 2º - Se entiende como población indígena a los miembros de las comunidades, concentradas y dispersas, autóctonas o de probada antigüedad de asentamiento en el territorio de la provincia, cuyas formas de vida estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones. Se considera "indio mapuche" a todo aquel individuo que, independientemente de su lugar de residencia habitual se defina como tal, y sea reconocido por la familia, asentamiento o comunidad a que pertenezca en virtud de los mecanismos que el pueblo mapuche instrumenta para su reconocimiento.

Artículo 3º - Se entiende como Comunidad Indígena al conjunto de familias que se reconozca como tal con identidad, cultura y organización social propia; conserven normas y valores de su tradición; hablen o hayan hablado una lengua autóctona; convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos; o a las familias indígenas que se reagrupen en comunidades de las mismas características para acogerse a los beneficios de la presente.

Artículo 4º - Las autoridades de las comunidades indígenas participan en las acciones que le incumban en forma directa y dentro de las limitaciones de sus propias comunidades, pudiendo peticionar y gestionar ante las autoridades, administrar y controlar los bienes comunes, adquirir bienes comunes para la comunidad y ejecutar por sí o por terceros, las obras necesarias para el desarrollo individual o colectivo de sus miembros. Todo ello sujeto a las reglamentaciones y determinaciones, que a tal efecto establecen la mayoría de los miembros de su comunidad.

Artículo 5º - Las comunidades indígenas deben inscribirse en un Registro Especial a crearse; los trámites de inscripción se realizan con la sola presentación de la solicitud por parte del jefe o responsable de la comunidad. Dicha presentación debe estar avalada por la mayoría de sus miembros y los del Consejo Asesor Indígena, debiendo constar en ella el nombre y el domicilio de la comunidad, miembros que la integran, las pautas de su organización interna y antecedentes que puedan acreditar su existencia en la provincia.

CAPITULO II DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

Artículo 6º - Se reconoce la existencia del Consejo Asesor Indígena, con sede en Ingeniero Jacobacci, compuesto por delegados electos de comunidades indígenas, asociaciones rurales y urbanas de la Provincia de Río Negro, el que actúa en forma conjunta con el Gobierno Provincial, para bregar por la aplicación de la presente, sin perjuicio de la autonomía que le corresponde como auténtico órgano representativo de la población indígena rionegrina, debiendo asegurar la libre participación de la misma.

Artículo 7º - Se crea el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas que actúa como Autoridad de Aplicación de la presente, con carácter consultivo y

resolutivo. El mismo está integrado por un Consejo Ejecutivo de tres (3) representantes del Consejo Asesor Indígena y dos (2) del Poder Ejecutivo; y un (1) Consejo Consultivo compuesto por siete (7) representantes del Consejo Asesor Indígena y siete (7) delegados del Poder Ejecutivo en sus distintas áreas de gobierno. El Poder Ejecutivo designa Presidente del Consejo Ejecutivo a uno de los tres representantes elegidos por el Consejo Asesor Indígena.

Artículo 8º - Los representantes del Consejo Asesor Indígena al Consejo de Desarrollo son designados por el Poder Ejecutivo conforme a la nómina elegida por voto secreto y facultativo de los miembros de la comunidad, previo censo de la misma, que llevan a cabo las autoridades respectivas, conjuntamente con la Junta Electoral Provincial, conforme a la reglamentación que fije el órgano de aplicación de la presente, en el término de noventa (90) días a partir de su designación, debiendo asegurar los principios democráticos de representación. Los representantes de la comunidad deben ser mayores de edad.

Artículo 9º - Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

- a) Formular y aplicar políticas, planes y programas en orden a los recursos que disponga, que tiendan al desarrollo integral de las comunidades indígenas, promoviendo la activa participación de sus miembros.
- b) Ejecutar programas coordinados y sistemáticos, que tiendan a promover el nivel productivo y económico, así como la prestación de servicios a las comunidades indígenas en función de los objetivos propuestos.
- c) Coordinar con otros organismos nacionales e internacionales públicos y privados, de la misma naturaleza.
- d) Atender las relaciones con entidades o agrupaciones dedicadas a la actividad de prestar apoyo a las comunidades indígenas.
- e) Solicitar la adhesión de los municipios a la presente, a los efectos de que los mismos presten su apoyo y colaboración a las mencionadas comunidades a fin de lograr la plena participación en el desarrollo económico, social y cultural de la provincia, y para bregar por el fiel cumplimiento de los principios consagrados en la presente.

Artículo 10 - El Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas arbitra los medios que faciliten la tramitación, administración y cumplimiento de lo requerido por las nuevas formas de asociación. Por ello, se crea en su jurisdicción el Registro Provincial de Comunidades, donde se inscriban las mismas en todo de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO III

DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Artículo 11 - Se dispone la adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y/o comunidades indígenas existentes en la provincia.

Artículo 12 - La Autoridad de Aplicación de la presente, coordinadamente con la Dirección de Tierras de la provincia efectúa las investigaciones en relación al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Tierras, las leyes vigentes de creación de Reservas, y los derechos vinculados a la tradicional posesión previos a la provincialización. En caso de detectar anomalías arbitra los medios para realizar las gestiones judiciales correspondientes.

Artículo 13 - En los casos que luego del análisis a que se hace referencia en el artículo anterior se detectan situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas y/o sus pobladores, el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado a los fines de la promoción inmediata de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan, y cuando fuera necesario se solicita al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la expropiación.

Artículo 14 - Las mensuras que se realicen en función de la presente por la Dirección de Tierras son gratuitas.

Artículo 15 - Cuando las tierras sean insuficientes se provee la adjudicación de otras aptas, preferentemente próximas a las actuales, o al asentamiento de la comunidad en sitio distinto.

El consentimiento libre y expreso de las comunidades indígenas debe ser tenido en cuenta para su asentamiento en sitios distintos o su lugar habitual.

Artículo 16 - El Estado provee en el caso de tierras insuficientes la consecuente expropiación de tierras aptas de propiedad privada y/o gestiona la transferencia de tierras fiscales de la provincia.

Artículo 17 - Cuando los recursos para la subsistencia de la comunidad del lugar, se limiten por propio crecimiento demográfico o por causas ajenas a la misma, el Estado provincial queda autorizado a anexar nuevas tierras o adjudicar otras en términos de los artículos 15 y 16.

Artículo 18 - Las tierras transferidas lo son bajo las condiciones del artículo 66 de la Ley Provincial Q Nº 279, y son libres de todo gravamen a partir de la traslación del dominio, por el término de diez (10) años.

Artículo 19 - En todos los títulos de propiedad que se otorguen de conformidad con la presente deben insertarse bajo pena de insanable nulidad, las siguientes cláusulas especiales:

- a) La prohibición de constituir derecho real alguno sobre el mismo con excepción de los que garanticen créditos de fomento con intervención favorable del órgano de aplicación.
- b) El compromiso del adjudicatario antes de saldar la deuda bajo pena de resolución del dominio y de pleno derecho, de constituir en indivisión forzosa la unidad económica imponiéndola a todos sus herederos hasta que alcancen la mayoría de edad, o en su defecto por un plazo de diez (10) años a contar desde su fallecimiento.
- c) Un pacto de preferencia, según lo previsto por el artículo 1368 del Código Civil, en cuya virtud el titular de dominio esta obligado, en caso de querer proceder a la venta de su propiedad, a notificar al Gobierno de la Provincia de Río Negro por intermedio de la Dirección de Tierras, a fin de que pueda hacer uso de su facultad de preferencia, bajo apercibimiento de revocabilidad del título del dominio a favor del Estado provincial.
- d) Los contratos de venta, sin perjuicio de las otras limitaciones que fija la Ley, insertan una cláusula de inembargabilidad del predio por el término de cinco (5) años a partir de la fecha de transferencia después de cancelada la deuda.

Artículo 20 - En los casos en que el Estado provincial ejerza el pacto de preferencia, da prioridad para la nueva adquisición a miembros de la comunidad indígena.

Artículo 21 - Los titulares del dominio sólo pueden transferir las tierras a entes nacionales, provinciales o municipales, para la ejecución de obras de servicio, de infraestructura, y equipamiento para las comunidades indígenas, toda vez que resulte de interés para las mismas.

Artículo 22 - El traspaso de la propiedad de la tierra, debe hacerse en todos los casos, respetando las costumbres de estas poblaciones y la legislación vigente en la materia, brindando los medios económicos y asistenciales necesarios de manera que puedan afianzar sus derechos sobre la misma, y realizar una real defensa de sus intereses.

Artículo 23 - El Poder Ejecutivo garantiza conjuntamente con la adjudicación de tierras, la aplicación de programas agropecuarios, forestales, mineros e industriales, en cualquiera de sus especialidades con la debida prestación de asesoramiento técnico y capacitación para la organización cooperativista de las actividades. Tal asesoramiento debe tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los indígenas, complementándolas con adelantos tecnológicos y científicos.

CAPITULO IV DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 24 - El Estado provincial dispone de recursos especiales para la efectiva prestación del servicio educativo en las zonas rurales desfavorables que habitan las comunidades indígenas a fin de garantizar la adquisición de los conocimientos que permitan la participación igualitaria de los indígenas en la sociedad nacional.

Artículo 25 - El Consejo Provincial de Educación coordina con la Autoridad de Aplicación de la presente, las medidas necesarias para la realización de programaciones específicas, la elaboración de contenidos, la orientación de las escuelas de comunidades indígenas, promoviendo la participación y la dignificación de la población.

Artículo 26 - La Autoridad de Aplicación de la presente, promueve la participación de los pobladores en los Consejos Escolares, establecidos por el artículo 65 de la Constitución Provincial #.

Artículo 27 - Se incorpora a los diseños curriculares para cada nivel, área y modalidad contenidos referidos a la historia y cultura, en sus expresiones anteriores y actuales de los pueblos indígenas americanos con especial énfasis en los pueblos de nuestro territorio, valorizando su participación en los procesos históricos.

Artículo 28 - Los planes que instrumente el Consejo Provincial de Educación resguardan y revalorizan la identidad histórica-cultural, tradiciones, costumbres, creencias y lengua de los pueblos.

Artículo 29 - Se asegura que los miembros de estas comunidades tengan acceso a la educación, en todos los niveles implementando en el área de educación un sistema de becas en tal sentido y dando prioridad para el acceso a las residencias escolares de nivel medio y terciario de ambos sexos, aldeas, escuelas itinerantes o a distancia.

Artículo 30 - La Autoridad de Aplicación a través del Consejo Provincial de Educación y/o las organizaciones comunitarias deben asegurar alternativas de educación permanente.

Artículo 31 - Se dispone del número de horas de clase necesarias y posibles en aquellos lugares donde existan indígenas que hablen su lengua y deseen transmitir a sus descendientes, asimismo sus pautas culturales, historia y tradiciones.

Para ello se promueve el intercambio cultural y capacitación de los indígenas para transmitir su cultura y tradiciones, garantizando la recopilación de datos culturales e históricos a través de los propios indígenas.

Artículo 32 - Se prohíbe la utilización y difusión de materiales didácticos e informativos que atenten contra la dignidad cultural e histórica de los pueblos indígenas.

Artículo 33 - La orientación artesanal se desarrolla sin menoscabo del patrimonio cultural de dichas comunidades, alentando la promoción de sus valores artísticos y sus formas de expresión.

Artículo 34 - Se adoptan las medidas adecuadas a las características sociales y culturales de estas comunidades a fin de garantizar a los educandos el real conocimiento de sus derechos y obligaciones, especialmente respecto del trabajo y los servicios sociales.

Artículo 35 - La Autoridad de Aplicación de la presente, coordina con el Consejo Provincial de Educación las acciones conducentes a la construcción de nuevos establecimientos escolares en las comunidades indígenas, donde no los haya y a la adecuación de los existentes, en la medida que las posibilidades presupuestarias los permitan.

Artículo 36 - Los restos mortales de personas pertenecientes a pueblos originarios de la provincia, cualquiera fuera su característica étnica y lugar del país en su origen, que integren colecciones públicas o privadas de objetos antropológicos o formen parte del patrimonio cultural de museos públicos o privados en el ámbito de la Provincia de Río Negro, deben ser puestos a disposición de sus comunidades de pertenencia cuando éstas los reclamen.

Artículo 37 - Cuando no exista reclamo por parte de sus comunidades, pueden seguir a disposición de las instituciones que las albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a todo cadáver humano.

La comunidad que realice el reclamo debe estar reconocida en su jurisdicción de origen o contar con aval de organismo oficial que certifique su existencia.

CAPITULO V DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EL TRABAJO Y LA SALUD

Artículo 38 - La Autoridad de Aplicación de la presente coordina con los poderes del Estado la elaboración de un proyecto que contemple el derecho a la jubilación ordinaria, y a la pensión automática para casos de indigencia comprobada de este sector.

Artículo 39 - El Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.PRO.S.S.) conjuntamente con la Autoridad de Aplicación, arbitra los medios necesarios para la progresiva incorporación a ese servicio de grupos familiares indigentes, realizando previamente los estudios pertinentes.

Artículo 40 - La Autoridad de Aplicación en coordinación con las áreas de Gobierno, Trabajo y Desarrollo Social, propone a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en materia laboral, medidas con carácter de excepción que garanticen la no

discriminación y explotación laboral del indígena y aseguren los plenos derechos del trabajador.

Artículo 41 - Cuando el Estado provincial por administración propia o por terceros, ejecuta obras o realiza servicios en estas comunidades o en sus áreas de influencia que requieran la incorporación de mano de obra, da prioridad a trabajadores de la zona.

Artículo 42 - Cuando las obras o prestaciones de servicios en estas comunidades se realicen por terceros, la provincia incluye en las cláusulas licitatorias la prioridad para la incorporación de esta mano de obra.

Artículo 43 - El Estado provee de asistencia legal, intérpretes y otros medios en todos los trámites judiciales y/o administrativos que realicen los beneficiarios de la presente.

Artículo 44 - El Consejo promueve la integración cooperativa en todos los niveles: producción, concentración, comercialización e industrialización, como sistema adecuado para la diversificación productiva y el mejoramiento socio-económico de la población indígena. A ese efecto, coordina acciones con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia y otros organismos nacionales competentes en la materia.

Artículo 45 - El Consejo Provincial de Salud Pública, debe crear unidades sanitarias en las comunidades indígenas, que carezcan de tales servicios y adecuar las existentes, tomando las medidas necesarias para priorizar dicha acción. Dispone asimismo, la formación de agentes sanitarios pertenecientes a la misma comunidad.

Artículo 46 - La Autoridad de Aplicación de la presente impulsa coordinadamente con el Consejo Provincial de Salud, el funcionamiento de los Consejos Hospitalarios.

Artículo 47 - La Autoridad de Aplicación ha de formular en conjunto con el Consejo Provincial de Salud, los planes, programas y acciones en materia de salud, de acuerdo a las prioridades de la comunidad indígena.

CAPITULO VI DE LA VIVIENDA

Artículo 48 - El Estado provincial afecta recursos especiales para la construcción de viviendas de acuerdo a las necesidades que se determinen en conjunto, por la Autoridad de Aplicación de la presente y los organismos competentes.

Artículo 49 - Los planes de viviendas para las comunidades indígenas se adecúan a las normas consuetudinarias en lo atinente a la estructura familiar y social. La Autoridad de Aplicación coordina con el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) la realización de los estudios necesarios en relación a la construcción de las mismas, y se establecen cupos mínimos para adjudicar a los beneficiarios de la presente.

CAPITULO VII DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 50 - El órgano de aplicación de la presente coordina con los medios masivos de comunicación oficiales y privados, todos los temas concernientes a la comunidad indígena en general, y al pueblo mapuche en particular, garantizando la formación y capacitación de comunidades sociales.

Artículo 51 - El Estado provincial facilita mecanismos participativos y asesoramiento que permitan a cada comunidad, desarrollar, crear y/o mejorar los medios de comunicación que sean necesarios. A través de estos espacios se brinda especial asesoramiento con respecto a derechos y obligaciones en áreas de trabajo y seguridad social, y con respecto a la información económica y comercial para el productor y en todos los aspectos que hacen a la vida de los indígenas y pobladores rurales, contemplando en todas las programaciones de los medios de comunicación social pautas culturales que eliminen los prejuicios existentes con relación a la población indígena y que aseguren el respeto a las mismas.

Artículo 52 - Se facilitan los medios para que toda la comunidad cuente con equipos de radio en los parajes. La comunidad designa a los recursos humanos que garanticen la prestación de servicios.

Artículo 53 - La Autoridad de Aplicación coordina con los organismos competentes en la materia la creación de un sistema interconectado.

CAPITULO VIII DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54 - Los derechos y obligaciones consagradas en la presente, no significan de manera alguna la negación de otros derechos, deberes y garantías establecidas en la Constitución Nacional #, Provincial y las leyes que se dicten en consecuencia.

Artículo 55 - La presente se hace extensible a los pobladores rurales carenciados, cuya situación se asimile a la de los indígenas.

Artículo 56 - El Consejo una vez promulgada la presente, realiza un estudio etnológico y censal de la situación jurídica, social y económica de las comunidades indígenas.

Artículo 57 – Se crea el Fondo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que está integrado por los siguientes recursos:

- a) Los aportes de Rentas Generales que establezca la Ley de Presupuesto.
- b) Los aportes y subsidios de la nación, la provincia y los municipios.
- c) Las donaciones, subsidios y legados de cualquier origen.
- d) Todo otro aporte que se disponga por Ley o Decreto.

Artículo 58 - Los fondos previstos en el artículo anterior, son depositados en una cuenta especial del Agente Financiero de la provincia, denominada "Fondo de desarrollo de las comunidades indígenas", y son administrados por el Consejo Ejecutivo del Consejo de Desarrollo conforme a las normas vigentes en la reglamentación.

Artículo 59 - El fondo creado es destinado a cubrir los gastos que demande el programa anual de acción de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 60 - En caso de duda sobre la interpretación, aplicación o alcance de la presente, los encargados de aplicarla, deciden en el sentido más favorable al indígena.

Artículo 61 - La presente es traducida al idioma mapuche y se instrumenta su difusión y conocimiento en todos los niveles del sistema educativo.

CAPITULO IX DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 62 - Los miembros del Consejo Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, en su primera constitución y hasta las elecciones del Consejo Asesor Indígena previstas en el artículo octavo de la presente, son designados por el Poder Ejecutivo del siguiente modo:

- a) Dos (2) Delegados del Poder Ejecutivo.
- b) Tres (3) Delegados del Consejo Asesor Indígena elegidos por la organización de acuerdo con sus mecanismos habituales de elección de representantes, debiendo asegurar los principios de representación de las minorías.

Artículo 63 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se toman de las partidas presupuestarias asignadas a los organismos correspondientes, hasta la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto General de la provincia.

Artículo 64 - La Provincia de Río Negro adhiere en todas sus partes a la Ley Nacional N° 25.517 y a su Decreto Reglamentario N° 701/2010 sobre "Restitución de Restos Humanos de los Pueblos Originarios".

Anexo I

Ley Nacional Número 25.517

COMUNIDADES INDÍGENAS

Artículo 1º - Los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen.

Artículo 2º - Los restos mencionados en el artículo anterior y que no fueron reclamados por sus comunidades podrán seguir a disposición de las instituciones que los albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos.

Artículo 3º - Para realizarse todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de las comunidades interesadas.

Artículo 4º - Se invita a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.

Artículo 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo II

Decreto Nacional Número 701/2010

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2010.

VISTO el Expediente N° E-INAI-50191-2010 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), organismo descentralizado del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la CONSTITUCIÓN NACIONAL, las Leyes Nº 25.517 de restitución de restos aborígenes y disposición sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, Nº 23.302, Nº 24.071 y Nº 25.743, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 75, inciso 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Que, mediante la Ley Nº 24.071, se aprobó el CONVENIO 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece que los Estados Miembros deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.

Que, por la Ley Nº 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.

Que, asimismo, mediante la ley precitada, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), como entidad descentralizada del ex Ministerio de Salud y Acción Social, actual MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y se lo designó como autoridad de aplicación de la misma.

Que, mediante Resolución INAI Nº 152/04, se creó el Consejo de Participación Indígena, a los efectos de garantizar la participación y consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas.

Que, la Ley Nº 25.517, estableció que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que los reclamen.

Que la referida ley requiere que todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de las comunidades interesadas.

Que el Consejo de Participación Indígena y las organizaciones de los pueblos originarios argentinos, han prestado su apoyo expresando su beneplácito respecto a la restitución de los restos mortales a sus comunidades de origen requiriendo la participación y colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI).

Que por otra parte, en el marco del Congreso Mundial de Arqueología en el año 1990, se alcanzó el denominado "Acuerdo de Vermillion", donde arqueólogos y pueblos indígenas establecieron lineamientos éticos con relación al tratamiento de restos humanos indígenas, y posteriormente, el Código de Ética Profesional de "INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS" establece que el museo tendrá que responder con diligencia, respeto y sensibilidad a las peticiones de que se retiren de la exposición al público restos humanos o piezas con carácter sagrado, respondiendo de la misma manera, a las peticiones de devolución de dichos objetos.

Que la Ley N° 25.743 establece los mecanismos para la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.

Que, en función de lo antes analizado, resulta menester proceder al dictado de la presente medida, a los fines de asegurar el cumplimiento de los derechos sobre restitución de restos aborígenes y disposición sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA
D E C R E T A:

Artículo 1º - Establécese que, a partir del dictado del presente Decreto, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley N° 25.517, quedando facultado para dictar las normas complementarias necesarias para su cumplimiento.

Artículo 2º - El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), ejercerá las siguientes acciones:

- a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
- b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y su efectiva restitución.
- c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la Ley N° 25.517, en especial con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
- d) Participar en las solicitudes de restitución de restos mortales provenientes de las comunidades y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto administrativo fundado, los antecedentes históricos, étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que se conformen ante cada reclamo.
- e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
- f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las comunidades aborígenes, contemplados en el artículo 3º de la Ley N° 25.517.
- g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el cumplimiento de la Ley N° 25.517, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se cumplan sus finalidades.

Artículo 3º - Los organismos públicos o privados, que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo de prórroga de hasta DOCE (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso de la investigación, así como el aval de la máxima autoridad del organismo en la materia.

Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.